

REVISTA ESPAÑOLA DE
CIENCIA POLÍTICA

NÚMERO 19
OCTUBRE 2008



Democracia y democratización en África subsahariana: algunas valoraciones comparativas

Davide Grassi

El objetivo del artículo es, por un lado, resumir las conclusiones ya alcanzadas por la comunidad científica sobre los actuales procesos de democratización en el África subsahariana y, por otro, reflexionar crítica y comparativamente sobre el desarrollo de los estudios politológicos acerca de este tema. La intención es aclarar dónde y en qué medida existe un mayor consenso entre los estudiosos y en qué casos, por el contrario, las opiniones son mayormente discordantes, de manera que sean oportunas nuevas y diversas aportaciones en la investigación. Tras una breve introducción histórica, se apuntarán las evoluciones políticas más recientes. Nuestra atención se centrará después sobre algunos elementos que parecen especialmente útiles para explicar el curso de las transformaciones políticas en el área: el desarrollo socioeconómico, el papel del Estado, de la nación y de las nuevas instituciones democráticas, así como el influjo de la cultura política, la legitimidad y el factor religioso. Se concluirá con algunas observaciones sobre la importancia de los factores internacionales.

Palabras clave: África subsahariana, democratización, transformaciones políticas, regímenes políticos.

Durante la segunda mitad del siglo XX no ha habido muchos países que hayan sabido crear, sin etapas intermedias, democracias sólidas y de larga duración: una experiencia democrática previa contribuye, en general, a estabilizar y reforzar los regímenes que paulatinamente van abandonando el autoritarismo. A su vez, mientras más longevos y recientes sean los gobiernos democráticos precedentes, mayor será el beneficio.

Respecto a ambos puntos, la experiencia democrática del África subsahariana ha sido poco relevante. Al final del segundo conflicto mundial sólo tres Estados africanos eran formalmente independientes: Egipto, Etiopía y Liberia (a éstos se les podría añadir la República de Sudáfrica, aunque en el ámbito de la Commonwealth británica), 35 años más tarde, todo el continente se había emancipado y una serie compuesta de naciones soberanas constituían su heterogéneo perfil político. Entre los años treinta y 1956 se había ido agotando el proceso de colonización europea, comenzando un proceso que más tarde desembocó en la lucha por la independencia nacional. La fase central de este nuevo ciclo tiene lugar entre 1957 y 1970: se inicia con la independencia de Ghana, continúa en los años sesenta con la descolonización de la mayor parte de los países del área subsahariana y culmina en 1963 con la creación de la Organización de la Unidad Africana (OUA). Durante este periodo, se intensificó la actividad política y social, se elaboraron las tesis del nacionalismo, de la identidad cultural y política del continente y del “socialismo africano” y se volvió más cruenta la guerra de liberación contra Portugal, última potencia colonial. Entre mediados de los setenta y 1990, el proceso se completa: se liberan los territorios portugueses, también tras la Revolución de los Claveles y la sucesiva apertura democrática, y en Zimbabue se transfiere el poder a la mayoría negra en una mesa de negociaciones, después de una larga y cruenta guerrilla. En los años noventa fue el turno de Namibia y de la República Sudafricana, donde finalmente llega a abolirse el odioso sistema del *apartheid*.

Al inicio de las transformaciones aquí apuntadas, numerosos líderes nacionalistas habían solicitado a las potencias ocupantes que se reconocieran, junto con la independencia, las libertades civiles y políticas básicas, el sufragio universal y las elecciones libres. De hecho, la descolonización coincidió en muchos casos con la instauración de democracias electorales que, al menos formalmente, seguían el modelo liberal occidental. Conquistado el poder, no obstante, las nuevas autoridades africanas repudiaron a menudo el multipartidismo, defendiendo que las instituciones democráticas fomentaban divisiones e inestabilidad en un ambiente marcado por el tribalismo y por las diferencias étnicas, y que el orden de gobierno recientemente introducido constituía un obstáculo aparatoso para el desarrollo económico y social de la región (Wiseman, 1997 y 1995). Las nuevas Constituciones, por ejemplo, redactadas de acuerdo con las autoridades coloniales precedentes, fueron consideradas excesivamente parecidas a los originales europeos y no lo suficientemente adaptadas a la realidad política y social del África negra: una imposición que llevaba a agravar, más que a resolver, los muchos problemas que las jóvenes naciones se disponían a afrontar. Estas críticas, sin embargo, procuraban también justificar la sustitución de las recientes instituciones democráticas por regímenes autoritarios que dejaban absoluta libertad de maniobra a los nuevos líderes políticos, permitiéndoles apoderarse de los recursos económicos y financieros del Estado y de la sociedad.

TABLA 1.

CLASIFICACIÓN DE LOS REGÍMENES POLÍTICOS DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA (2006)

Democracia liberal (FH 1-2.0)	Democracia electoral (FH > 2)	Regímenes ambiguos	Regímenes autoritarios de tipo electoral	Regímenes autoritarios de tipo electoral hegemónico	Regímenes autoritarios políticamente cerrados
Cabo Verde (1,1)	Namibia (2,3)	Sierra Leona (4,3)	Tanzania (4,3)	Burkina Faso (5,3)	Suazilandia (7,5)
Mauricio (1,2)	Senegal (2,3)	Zambia (3,4)	Nigeria (4,4)	Mauritania (5,4)	Costa de Marfil (7,6)
Ghana (1,2)	Lesoto (2,3)	Malawi (4,3)	Gambia (5,4)	Guinea (6,5)	Guinea Ecuatorial (7,6)
Sudáfrica (2,2)	Níger (3,3)	Comores (3,4)	Uganda (5,4)	Ruanda (6,5)	Eritrea (7,6)
Botsuana (2,2)	Seychelles (3,3)	Guinea-Bissau (4,4)	Yibuti (5,5)	Congo (6,5)	Somalia (7,7)
Mali (2,2)	Kenia (3,3)	República Centroafricana (5,4)	Etiopía (5,5)	Angola (6,5)	Sudán (7,7)
Santo Tomé y Príncipe (2,2)	Madagascar (4,3)	Gabón (6,4)	Togo (6,5)	Chad (6,6)	
Benín (2,2)	Mozambique (3,4)		Congo Rep. Dem. (5,6)	Camerún (6,6)	
	Liberia (3,4)			Zimbabue (7,6)	
	Burundi (4,5)				

Fuente: adaptado de Diamond (2007: Apéndice).

El periodo tras la independencia se caracterizó, hasta los años ochenta, por el desmantelamiento de las democracias apenas creadas, reemplazadas, como se ha dicho, por sistemas políticos autoritarios, de partido único o militar¹. En algunos casos, el partido que se había adjudicado las primeras elecciones impuso su supremacía, reprimiendo a las fuerzas de la oposición y persiguiendo o encarcelando a sus líderes. Salvo algunas excepciones, tales partidos se redujeron rápidamente a una tenue cobertura institucional para la gestión de los negocios personales de un estrecho círculo de astutos hombres con poder. El ejército se convirtió en el otro protagonista del discurrir político de la época, reemplazando a menudo regímenes civiles, muchos de ellos de partido único y, por lo tanto, ya autoritarios. A pesar de las frecuentes proclamas en este sentido, no obstante, las fuerzas armadas, una vez en el poder, no reintrodujeron la democracia y poco contribuyeron a la estabilidad, política y económica, de los nuevos regímenes autoritarios y a su desarrollo. De hecho, con frecuencia los golpes se sucedieron uno al otro, en una áspera lucha por el control del país (Luckham, 1994). Aunque brutales respecto a la oposición y entregados al saqueo de las riquezas nacionales, durante este periodo los regímenes autoritarios fueron institucionalmente débiles y sufrieron graves crisis de legitimidad (Young, 1996: 54-55).

Incluso en esta etapa turbulenta, sin embargo, no faltaron aperturas democráticas y espacios para una competición política más amplia, con nuevas instituciones que regulaban su desarrollo. En Nigeria, por ejemplo, el general Obasanjo decretó, en 1979, el regreso a la

1. Para una reseña de los golpes de Estado militares acaecidos entre 1956 y 2001, véase McGowan (2003). En total, en los 48 países de la región subsahariana durante este periodo se llevaron a cabo con éxito 80 golpes militares, 108 fracasaron, mientras que fueron descubiertos y se truncaron al nacer otros 139 intentos.

democracia, la cual, sin embargo, no sobrevivió demasiado tiempo dadas la ineficacia preponderante y la difundida corrupción². Entre 1974 y 1981 en Senegal el sistema político se transformó gradualmente, pasando del predominio de un partido único a un limitado multipartidismo y, más tarde, a un multipartidismo real, ratificado por el pase de consignas entre el presidente Senghor y su sucesor designado, Diouf. Sin contar que al final de la década de los setenta, tres de los dictadores más sanguinarios del continente, Idi Amin en Uganda, Jean-Bédél Bocassa en la actual república Centroafricana y Francisco Macías Nguema en Guinea Ecuatorial fueron finalmente depuestos. En esta fase, en general políticamente oscura, no debemos olvidar las excepciones de Botsuana, de las Islas Mauricio y de Gambia, países que continuaron siendo democráticos desde su independencia hasta los años noventa³.

LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CONTINENTE AFRICANO (1989-2006)

Entre finales de la década de los ochenta y de los noventa la democracia se difunde rápidamente por toda la región. Es cierto que en un reducido número de países disminuye la protección de los principales derechos civiles y políticos, aunque sólo en Gambia y Sudán el deterioro de tales derechos es relevante, implicando la llegada de regímenes militares que sustituyen a los regímenes semidemocráticos precedentes. Ahora bien, mucho más común fue la transformación contraria, de regímenes autoritarios en democracias electorales, algunas de ellas especialmente significativas ya que la reforma se quedó a un paso de la mutación en democracias más “completas”, como sucedió en Mozambique o en Níger (véase la tabla 2)⁴. A comienzos del nuevo milenio en numerosos países africanos el voto, al igual que en las democracias occidentales más maduras, permitió sustituir de manera pacífica a los viejos líderes políticos, como en Benín, Cabo Verde, Madagascar, Malawi, Mali, Namibia, Níger, Santo Tomé y Príncipe, República Sudafricana y Zambia⁵. Asimismo, y a pesar de que los militares continuasen involucrados en la política y de que los golpes de Estado siguiesen siendo comunes incluso después de la democratización, el número de golpes con éxito descendió considerablemente entre 1980 y 2001 (McGowan, 2003). En total,

-
2. Tal vez sea éste el único caso, antes de los años noventa, en el que los militares entregan el poder a un régimen democrático. En 1999, al final de un enésimo periodo de dominio militar, Obasanjo será elegido presidente en una nueva fase democrática.
 3. Junto a estos países debe hacerse referencia también a Zimbabue, cuya independencia, como se ha dicho, tuvo lugar en 1980. El sistema democrático de Gambia, por ironía de la suerte, será abolido por un golpe de Estado militar en 1994, durante la ola de democratización que recorrerá gran parte del continente subsahariano. Véase también Santamaría y Enara Echart (2006), Carbone (2005), Roca (2005), Tordoff (2002), Thomson (2002), Chazan, Lewis, Mortimer, Rothchild y Stedman (1999) e Iniesta (1992).
 4. El cambio se puede considerar acabado en Ghana, con la victoria de la oposición en las elecciones de 2000, resultado confirmado por las elecciones presidenciales de diciembre de 2004.
 5. En Mali, país pobre del África subsahariana, la población profesa mayormente la fe musulmana. La existencia y la supervivencia de un régimen democrático en Mali representa un verdadero enigma ya que, en este caso, no se cumple toda una serie de requisitos considerados indispensables para una duradera transformación democrática. Sobre este país, ideal para un estudio de caso teóricamente relevante, véase Smith Kay (2002).

38 países mejoraron sus propios estándares democráticos entre 1989 y 2006, algunos de manera acentuada: Benín y Sudáfrica, por citar sólo dos casos, pasaron de una situación plenamente autoritaria o semiautoritaria a una democracia “liberal” (véase la tabla 2)⁶.

TABLA 2.

LA EVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA (1989-2006)

Países	Puntuación democrática (1989)	Puntuación democrática (2006)	Estatus democrático (2006)
Cabo Verde	5,5	1	Democracia liberal
Mauricio	2	1,5	Democracialiberal
Ghana	6	1,5	Democracia liberal
Mali	6	1,5	Democracia liberal
Sudáfrica	5,5	2	Democracia liberal
Santo Tomé y Príncipe	6,5	2	Democracia liberal
Botsuana	2,5	2	Democracia liberal
Benín	7	2	Democracia liberal
Namibia*	3,5	2,5	Democracia electoral
Senegal	3,5	2,5	Democracia electoral
Lesoto	6	2,5	Democracia electoral
Níger	6	3	Democracia electoral
Seychelles	6	3	Democracia electoral
Kenia	6	3	Democracia electoral
Madagascar	5	3,5	Democracia electoral
Mozambique	6,5	3,5	Democracia electoral
Liberia	7	3,5	Democracia electoral
Burundi	6,5	4,5	Democracia electoral
Sierra Leona	5	3,5	Regímenes ambiguos
Zambia	6,5	3,5	Regímenes ambiguos
Malawi	6,5	3,5	Regímenes ambiguos
Comores	6,5	3,5	Regímenes ambiguos
Guinea-Bissau	6,5	4	Regímenes ambiguos
República Centrafricana	6	4,5	Regímenes ambiguos
Tanzania	6	3,5	Autoritarios electorales
Nigeria	5	4	Autoritarios electorales
Gambia	3	4,5	Autoritarios electorales
Uganda	7	4,5	Autoritarios electorales
Yibuti	6	5	Autoritarios electorales
Etiopía	6,5	5	Autoritarios electorales
Gabón	6	5	Autoritarios electorales
Congo Rep. Dem.	6,5	5,5	Autoritarios electorales
Burkina Faso	6,5	4	Autoritarios hegemónicos

6. También en el caso de los países subsaharianos, como ya se ha observado a nivel general (Diamond, 1996), es evidente el impacto de las dimensiones del país sobre procesos de transición política. Los países más pequeños y con población más baja que la media del continente han sido más activos en los procesos de democratización. Entre los países mayores, sólo Sudáfrica y Ghana pueden considerarse en 2006 plenamente democráticos; de entre los otros siete países más poblados (Etiopía, República Democrática del Congo, Tanzania, Sudán, Uganda, Mozambique y Kenia), sólo los dos últimos pueden denominarse democracias de tipo electoral.

TABLA 2 (CONT.).

LA EVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA (1989-2006)

Países	Puntuación democrática (1989)	Puntuación democrática (2006)	Estatus democrático (2006)
Mauritania	6	4,5	Autoritarios hegemónicos
Guinea	5	5,5	Autoritarios hegemónicos
Ruanda	7	5,5	Autoritarios hegemónicos
Congo	6,5	5,5	Autoritarios hegemónicos
Angola	5	5,5	Autoritarios hegemónicos
Togo	6	5,5	Autoritarios hegemónicos
Chad	6,5	6	Autoritarios hegemónicos
Camerún	6	6	Autoritarios hegemónicos
Zimbabue	5,5	6,5	Autoritarios hegemónicos
Suazilandia	5,5	6	Autoritarios cerrados
Costa de Marfil	6	6,5	Autoritarios cerrados
Guinea Ecuatorial	7	6,5	Autoritarios cerrados
Eritrea**	5,5	6,5	Autoritarios cerrados
Somalia	7	7	Autoritarios cerrados
Sudán	4,5	7	Autoritarios cerrados
Media	5,7	4,1	

* Independiente desde 1989-90. La medición se refiere a aquel año.

** Independiente desde 1993. La medición se refiere a aquel año.

Fuentes: adaptado de Freedom House (2007) y Diamond (2007: Apéndice).

En Benín, a consecuencia de las graves dificultades económicas en que se hallaba el país y de un creciente malestar político, el régimen autoritario de carácter marxista-leninista cedió el paso a un régimen democrático en 1990. El instrumento utilizado para modificar el antiguo régimen fue una Conferencia Nacional, en la cual estuvieron presentes tanto las fuerzas del gobierno como las de la oposición, además de personalidades representantes de varios grupos sociales. En las primeras elecciones el gobierno fue derrotado por sorpresa por el representante de la oposición, Nicéphore Soglo, quien, sin embargo, fue a su vez vencido por el dictador Mathieu Kerekou en las elecciones de 1996. A pesar de que las elecciones de 2001, en las que de nuevo ganó Kerekou, fueron contestadas por la oposición, Benín parece haber seguido un considerable desarrollo democrático. En 2003, un total de catorce partidos participaron en las elecciones para la renovación del Parlamento, consideradas por los observadores internacionales como elecciones sustancialmente libres e imparciales (Freedom House, 2006). Una vez introducida, la democracia favoreció la protección de los derechos fundamentales. La prensa y los medios de comunicación en general adquirieron la libertad de criticar la actividad del gobierno, se respetó la libertad de asociación y de religión y mejoró notablemente la defensa de los derechos humanos. La introducción de la democracia facilitó también el progreso social: en 2002, por ejemplo, se aprobó un nuevo código de familia, que reforzó, entre otros, los derechos de la mujer en relación a la propiedad privada y la herencia.

Ahora bien, la transformación política más importante ha tenido lugar sin duda en Sudáfrica (Kiloh, 1997). Las elecciones de 1994 pusieron fin al régimen del *apartheid* e introdujeron un sistema de gobierno democrático, ampliando el sufragio también para la mayoría de color. Nuevas elecciones nacionales y locales reforzaron el *trend* en la década siguiente: en general el proceso electoral fue satisfactorio, con un extenso trabajo de educación cívica y política, una adecuada y equilibrada información por parte de la prensa y de la televisión y un honesto recuento de votos. La nueva Constitución (1996) confirmó la profunda reforma del sistema político ya proclamada por la Constitución transitoria (1993), con una protección meticulosa de los principales derechos civiles y políticos, especialmente contra la discriminación por razón de raza, etnia o sexo. Una comisión llamada de la Verdad y la Reconciliación indagó sobre los abusos contra los derechos humanos durante los años del *apartheid*, ilustrando sobre todo las atrocidades cometidas por la minoría blanca, aunque sin olvidar la violencia perpetrada por la oposición (Gibson, 2005). Hoy en día, la libertad de prensa e información es real e incluso se realizan críticas severas contra el gobierno del African National Congress. La televisión pública es, sin duda, más libre que durante el *apartheid* y la magistratura es independiente y funciona de forma relativamente correcta, asegurando la protección de los derechos fundamentales (Freedom House, 2007)⁷.

En general, la expansión democrática en el área subsahariana ha sido sorprendente por muchos motivos y plantea numerosos interrogantes, comenzando por las condiciones que han favorecido su inicio y que facilitan, en algunos casos, su supervivencia. Los politólogos se han preguntado, también, en qué medida las hipótesis y las explicaciones, formuladas sobre contextos geográficos distintos, pueden ser aplicadas respecto a los acontecimientos políticos que están sacudiendo los países del “África negra”. No se debe, por otra parte, velar los numerosos problemas que afligen a las jóvenes naciones africanas y que a menudo caracterizan su evolución. En algunos casos, como en Somalia, Chad y Liberia, se ha dado un total colapso del aparato estatal que ha impedido el nacimiento de cualquier tipo de gobierno, democrático o no, durante periodos más o menos prolongados⁸. En otros, los nuevos regímenes, si bien bajo una apariencia de democracia, no satisfacen los criterios mínimos de respeto de los derechos civiles y políticos básicos y, de hecho, son autoritarios: para algunos serían más precisamente “democracias de fachada” (es el caso de Camerún y

7. Obviamente no faltan obstáculos para una plena democratización, algunos de ellos muy serios. En primer lugar la pobreza, muy difundida, que golpea sobre todo a la mayoría de color: a pesar de constituir tres cuartas partes de la población, la raza negra tiene una renta equivalente sólo a un tercio del producto nacional. Si bien la riqueza total de Sudáfrica es de las más elevadas de la región, una distribución poco equilibrada estimula el arraigo de tensiones sociales, con más de la mitad de la población todavía por debajo del índice de pobreza. Los niveles de violencia y de criminalidad, por otro lado, se han incrementado en la última década: homicidios, atracos, secuestros y hurtos son comunes y se han manifestado nuevos episodios de racismo, mientras que una corrupción endémica se ha difundido por el país. Por último, la epidemia de sida está produciendo un número creciente de víctimas y el índice de nuevas infecciones es de los más elevados del mundo.

8. Sobre el problema de los conflictos internos en el África subsahariana junto con algunas reflexiones acerca de la relación entre guerra civil y democratización, véase Carbone (2004).

de Zimbabue)⁹. Han aparecido, en suma, híbridos institucionales: en Uganda el presidente Museveni promovió una vertiente de democracia “sin partidos”, en la que se desarrolla una relevante competición electoral con ausencia de partidos políticos, dentro de un régimen sobre cuya naturaleza prevalecen abundantes dudas. No existe, pues, ningún país en el África subsahariana, incluida la República Sudafricana, en el que la democratización no pueda retroceder. A estos problemas, de carácter esencialmente político, hay que añadir otros factores que inhiben la instauración y el mantenimiento democrático, entre los que destacan la pobreza y el subdesarrollo.

De ahí la razón de que abundan adjetivos para calificar los límites de la transformación democrática en curso y la dificultad del proceso, con un viejo orden político ya superado y otro, nuevo, que se esfuerza en hacerse realidad (Herbst, 2001). Se ha hablado de democracia “iliberal”, de “pseudodemocracias”, de democracias “virtuales” o de “régimenes semiautoritarios” (Zakaria, 1997; Diamond, 1996; Joseph, 1998; Carothers, 1997). O bien, para volver a la terminología aquí adoptada, de régimenes “ambiguos”, “autoritarios de tipo electoral” o “autoritarios hegemónicos” (Diamond, 2002). Pocos gobiernos africanos, se ha dicho, pueden declarar hoy que tienen instituciones democráticas sólidas y aún menos una significativa experiencia de gobierno multipartidista. Con mucha más frecuencia la transformación de los régimenes autoritarios ha permitido que se lleven a cabo procesos electorales abiertos a distintos partidos pero en los que la oposición es, a menudo, sólo tolerada y la crítica libre drásticamente limitada, reduciendo al mínimo la posibilidad de que el gobierno en el poder sea derrotado (van de Walle, 2002). Para muchos los elementos democráticos fundamentales (elecciones, medios de comunicación independientes, partidos de la oposición, Parlamentos y elecciones periódicas) ya han sido introducidos, pero dichos elementos han sido fuertemente manipulados por los gobiernos, aunque procurando no provocar una condena abierta por parte de las potencias occidentales y de los donantes internacionales. Los nuevos régimenes subsaharianos se preocupan más, en definitiva, por parecer presentables ante la comunidad internacional que por afianzar los contenidos democráticos (Joseph, 1998).

Asimismo, se está consolidando la tendencia a reforzar los régimenes en el poder, tendencia que amplía el control de la vida política y convierte en problemática una protección eficaz de la oposición. De este modo, durante las segundas elecciones presidenciales, celebradas en trece países subsaharianos desde la apertura política hasta 1997, los vencedores alcanzaron un margen de dos a uno en al menos siete casos. En los catorce países que durante el mismo periodo tuvieron elecciones parlamentarias, los partidos en el poder podían contar con una mayoría de dos tercios en nueve casos (Bratton, 1998, tabla 2). La importancia

9. En 2002 en Camerún, el partido en el poder (el People's Democratic Movement, PDM) convocó y ganó, por un margen muy amplio, las elecciones multipartidistas al Parlamento nacional. Tales elecciones, sin embargo, fueron manipuladas, con intimidaciones a los candidatos de la oposición y numerosos fraudes electorales. Al mismo tiempo, la represión de los medios de comunicación fue atroz, las emisoras de radio y los canales de televisión que criticaban al entonces presidente, Paul Biya, fueron cerradas y los periodistas que trabajaban en ellas amenazados o encarcelados. Las fuerzas especiales de seguridad fueron arrestando impunemente a los opositores, muchos de los cuales han desaparecido (Freedom House, 2007).

de los cambios se ha ido verificando en el curso de los últimos años y no se puede dejar de tener en cuenta, aunque en ocasiones sea problemática, la mejora general de la competición política y de la participación. A pesar de que la práctica política se encuentre a menudo alejada de los ideales de la democracia más madura, el país subsahariano típico es hoy en día más democrático que diez o quince años atrás. La evolución más reciente, por otro lado, confirma la impresión de otros progresos en países como Kenia, Níger, Burundi e incluso Liberia. Tampoco es posible clasificar todos los regímenes multipartidistas del área del mismo modo, bajo la etiqueta de “democracias imperfectas”, puesto que la situación política varía según los casos y exige un atento análisis comparado para distinguir entre los países que han llevado a cabo progresos consistentes y aquellos que continúan siendo total o parcialmente autoritarios (van de Walle, 2002: 67)¹⁰.

EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

Los debates en curso dentro de la ciencia política comparada han influido, en primer lugar, a la hora de elegir las variables que explican los procesos de democratización. Los estudios sobre tales procesos ocupan hoy en día un espacio privilegiado en el panorama internacional de la investigación politológica. Si bien con énfasis diversos, el papel del desarrollo socioeconómico ha sido subrayado por todos los analistas, ya sea refiriéndose a los niveles de riqueza o bien a la *performance* socioeconómica en sentido más amplio, refiriéndose, por ejemplo, a los índices del desarrollo humano. La importancia del Estado y la incidencia de la nación y de los problemas relativos a la presencia de numerosos grupos étnicos, poco estudiados con anterioridad, han sido señalados por los politólogos que se ocupan de las democratizaciones más recientes en los países ex comunistas y en algunas áreas menos desarrolladas, como el África subsahariana. La extensa difusión del instrumento de los sondeos de opinión y su progresiva estandarización entre áreas sociopolíticas muy diversas han ampliado y enriquecido el debate sobre la legitimación de nuevos regímenes democráticos. Junto a estos factores, la tesis del “conflicto de civilizaciones”, avanzada por Samuel Huntington (1996), ha abierto el campo a un nuevo filón de investigación, que tiende a establecer la relación y la compatibilidad entre ciertas religiones y las instituciones democráticas. También en este caso hemos procurado presentar y resumir algunas de las contribuciones científicas más relevantes. El acuerdo sobre los factores internacionales es amplio a pesar de que no siempre los análisis reflejen esta presunta prioridad y cuenta mucho la perspectiva comparada o la internacionalista del autor. Recientemente, sin embargo, esto último ha sido rebatido.

La pobreza está realmente difundida por la región: muchos de los países más pobres de la Tierra son subsaharianos y en el continente la calidad de vida sigue siendo precaria. Los

10. El problema de la clasificación es complicado dada la dificultad de determinar indicadores democráticos válidos y fiables para el área (McHenry, 2000). Numerosos africanistas parecen sugerir que existe una vertiente africana de democracia aunque, a menudo, sin aclarar suficientemente cuáles son sus instituciones o normas características (véase Ake, 1996 y Udogo, 1997, al respecto).

países son básicamente rurales, con niveles de educación muy bajos y con una minúscula clase media. Durante los años sesenta, también esta región se benefició de un apreciable impulso económico que, no obstante, se agotó en la siguiente década. Entre 1975 y 1995 las economías locales, y sobre todo la renta per cápita, disminuyeron, en una sucesión, a menudo imprevisible, de breves expansiones y nuevos derrumbes. Precisamente la incapacidad de resolver los continuos problemas económicos provocó una profunda crisis entre los regímenes autoritarios y favoreció, de forma indirecta, las perspectivas de reforma política y de difusión de la democracia. Asimismo, también los primeros años noventa fueron especialmente negativos, marcados por otra notable disminución de la renta. Sólo a partir de mediados de la década, la situación mejora ligeramente: sobre todo vuelve a crecer la renta per cápita en la mayor parte del continente, ajustándose a la media de los valores del crecimiento global (World Bank, 2006).

Los casos africanos encajan sólo en parte con la hipótesis general del vínculo entre democratización y desarrollo socioeconómico. Los países que muestran un mayor grado de desarrollo son, por lo general, democracias liberales: Sudáfrica, Botsuana y las Islas Mauricio presentan rentas bastante más elevadas que la media regional y tienen gobiernos con un buen rendimiento democrático. Sin embargo, lo contrario no es siempre cierto: también países relativamente pobres, como Mali y Benín tienen desde hace algunos años regímenes respetuosos con los principales derechos civiles y políticos, y en ellos los gobiernos son elegidos de forma periódica mediante consultas electorales honestas, en las que tiene derecho a participar prácticamente la totalidad de la población. Las conclusiones subrayan la tesis de Przeworski sobre las diversas maneras en que se ha manifestado la compleja relación entre desarrollo y democracia en los últimos decenios y la compatibilidad entre instauración democrática y pobreza (Przeworski et alii 1996 y 2000). Asimismo, otros autores han señalado que, en los países no occidentales, la relación entre las dos variables es menos marcada (Foweraker y Krznic, 2000). Los niveles de riqueza, en definitiva, no nos permiten distinguir entre los regímenes parcialmente libres y los autoritarios: es fácil constatar que las democracias electorales, excluyendo el caso anómalo de las Seychelles, muestran en 2006 índices de renta per cápita inferiores o semejantes a los de los países autoritarios, cualquiera que sea su naturaleza (véase la tabla 3).

TABLA 3.

DEMOCRACIA Y *PERFORMANCE* SOCIOECONÓMICA EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA (2004)

	PNB per cápita (PPP US\$) (2004)	PNB per cápita crecimiento anual (1990-2004)	IDH (2004)
Democracia liberal FH 1-2			
Cabo Verde	5.727	3,5	0,722
Mauricio	12.027	3,9	0,8
Ghana	2.240	1,9	0,532
Mali	998	2,5	0,338
Sudáfrica	11.192	0,6	0,653

TABLA 3 (CONT.).

DEMOCRACIA Y PERFORMANCE SOCIOECONÓMICA EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA (2004)

	PNB per cápita (PPP US\$) (2004)	PNB per cápita crecimiento anual (1990-2004)	IDH (2004)
Santo Tomé y Príncipe	Nd	-0,4 (1990-2002)	0,607
Botsuana	9.945	4,2	0,57
Benín	1.091	1,4	0,428
Media	6.174	2,2	0,581
Democracia electoral FH > 2			
Namibia	7.418	1,3	0,626
Senegal	1.713	0,9	0,46
Lesoto	2.619	4,5	0,494
Níger	779	-0,7	0,311
Seychelles	16.652	2,1	0,842
Kenia	1.140	-0,6	0,491
Madagascar	857	-1,1	0,509
Mozambique	1.237	4,2	0,39
Liberia	Nd	4,1 (1990-2002)	0,311 (1993)
Burundi	677	-2,5	0,384
Media	3.550	1,2	0,482
Regímenes ambiguos			
Sierra Leona	561	-5,5	0,335
Zambia	943	-1,1	0,407
Malawi	646	0,9	0,4
Comores	1.943	-0,5	0,556
Guinea-Bissau	722	-2,6	0,349
República Centroafricana	1.094	-0,6	0,353
Media	985	-1,6	0,4
Regímenes autoritarios de tipo electoral			
Tanzania	674	1,1	0,43
Nigeria	1.154	0,8	0,448
Gambia	1.991	0,2	0,479
Uganda	1.478	3,5	0,502
Yibuti	1.993	-1,9	0,494
Etiopía	756	1,5	0,371
Gabón	6.623	-0,1	0,633
Congo Rep. Dem.	705	-6	0,391
Media	1.922	-0,1	0,468
Regímenes autoritarios de tipo hegemónico			
Burkina Faso	1.169	1,3	0,342
Mauritania	12.027	3,9	0,486
Guinea	2.180	1	0,445
Ruanda	1.263	-0,1	0,45
Congo	978	-0,2	0,52
Angola	2.180	-1,2	0,439
Togo	1.536	-1,2 (1990-2002)	0,495
Chad	2.090	2,1	0,368
Camerún	2.174	0,5	0,506
Zimbabue	2.065	-1,9	0,491
Media	2.766	0,4	0,454

TABLA 3 (CONT.).

DEMOCRACIA Y *PERFORMANCE* SOCIOECONÓMICA EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA (2004)

	PNB per cápita (PPP US\$) (2004)	PNB per cápita crecimiento anual (1990-2004)	IDH (2004)
Regímenes autoritarios políticamente cerrados			
Suazilandia	5.638	2,1	0,5
Costa de Marfil	1.551	-1,1	0,421
Guinea Ecuatorial	20.510	30,4	0,653
Eritrea	977	0,6	0,454
Somalia	Nd	Nd	0,221 (1993)
Sudán	1.949	3,4	0,516
Media	6.121 (2.528)	7,1 (1,25)	0,461

Fuentes: Freedom House (2007) y UNDP (2007).

Según gran parte de los estudios, el mantenimiento de la democracia dependería también de una positiva *performance* económica, especialmente si ésta es prolongada. Los datos de los que disponemos no nos permiten llegar a una conclusión definitiva. En los países con democracia “liberal” y “electoral”, el crecimiento se muestra más marcado pero mantiene modestos niveles en general, mientras que en los países políticamente cerrados, la *performance* es mejor incluso (véase la tabla 3). Junto a esto, los países que entre 1990 y 2004 mejoraron su *status* político, llegando a ser mayormente democráticos, experimentaron un crecimiento prácticamente negativo similar al de aquellos países en los que la situación política había empeorado (UNDP, 2004). Tampoco parecen ayudar los indicadores más completos del desarrollo humano: si bien los países más democráticos son al mismo tiempo aquellos con los valores más elevados, un mejor nivel de desarrollo humano no siempre comporta un rendimiento político superior (véase la tabla 3). Por lo demás, la definición del vínculo se complica a raíz de la precariedad y de la ambigüedad de las configuraciones políticas y de la sucesión, en muy breves intervalos, de regímenes más o menos autoritarios o democráticos en el mismo país.

Las reformas económicas emprendidas por los nuevos regímenes democráticos no produjeron resultados apreciables. Si el proceso de cambio político y de democratización, acompañado de un pluralismo más profundo, no empeoró necesariamente las perspectivas del crecimiento, tampoco ayudó mucho. La incapacidad de los nuevos regímenes de influir en la situación económica depende de una compleja serie de factores. El elemento más significativo de la *performance* regional, por ejemplo, sigue siendo el índice anual de precipitaciones atmosféricas. A su vez, tanto el carácter esencialmente agrícola de la economía como la escasez y la precariedad de las infraestructuras continúan obstaculizando fuertemente cualquier perspectiva de racionalización o de cambio. En el ámbito político ha influido de forma negativa la debilidad del Estado y las relaciones, no siempre positivas, con los países donantes. Los nuevos líderes democráticos, por último, provienen con frecuencia de las coaliciones sociales que dominaban *l'ancien régime* y, en muchos casos, no están dispuestos a apoyar reformas que podrían comprometer sus intereses (van de Walle, 1999: 37-38).

Las políticas económicas, por otra parte, no ocuparon un puesto central en las campañas electorales que condujeron a la democratización, durante las que muchos partidos se limitaron a formular promesas genéricas de mejorar las precarias condiciones de vida o de reducir la escalada de corrupción. Una vez alcanzado el poder, por otro lado, los nuevos líderes debieron tener en cuenta los severos límites del presupuesto de Estado¹¹. Sin embargo, no faltan excepciones y el caso de las Islas Mauricio y de Botsuana son significativos en este sentido. Su éxito democrático es también el resultado de políticas caracterizadas por gastos de *welfare* adecuados a favor de aquellos cuya supervivencia y bienestar material peligraba a raíz de las rápidas transformaciones económicas (Bräutigam, 1999; Joseph, 2003: 24). No obstante, se trata, convendría repetirlo, de excepciones relativas a una transformación que, especialmente desde la mitad de los ochenta, ha visto una gradual pero continua erosión de la presencia del Estado en la sociedad.

La permanente debilidad económica y organizativa de las clases medias y de los trabajadores, cuyos recursos económicos dependen con frecuencia de los recursos estatales, y la fragilidad de las organizaciones sindicales, y de los partidos que deberían representarlas, obstaculizan las perspectivas de democratización de las sociedades subsaharianas actuales (Jeffries, 1998). La extrema pobreza, los bajos índices de alfabetización, la marcada naturaleza rural de la sociedad y la continua relevancia de la comunidad étnica, junto a la limitada capacidad de movilidad física de las personas, contribuye a dificultar aún más la participación política. Los estratos más empobrecidos, por lo demás, aun confirmando su insatisfacción por la *performance* de sus respectivos gobiernos, demuestran también una escasa confianza en los canales formales de participación (Schatzberg, 2001)¹². Éstos, y especialmente la mayoría que vive en las áreas rurales, se adhieren a menudo a relaciones de tipo clientelar, alimentando así una demanda ante las clases políticas de prácticas patrimoniales que, obviamente, no ayudan a la democracia (Bratton, 2006; Barkan, 2000; Carbone, 2005: 201). Esto último es importante: las reglas de funcionamiento de las instituciones políticas y de las burocracias públicas han sido rápidamente trastornadas por lógicas de tipo patrimonial, es decir, por una gestión arbitraria o personal de la gestión de la *res* pública que se extiende desde los vértices de los gobiernos nacionales a los órganos locales, desde las diligencias ministeriales a los funcionarios de base. La noción de “neopatrimonialismo” sintetiza esta común combinación de instituciones modernas y lógica patrimonial. Los elementos formales, impersonales, universales y públicos de la política y de la administración —encarnados en las organizaciones de la esfera pública mediante instituciones, reglas y procedimientos— dejan paso a aquellos informales, personales, particularizados y privados. Todo ello finaliza con frecuencia en políticas de saqueo de las riquezas públicas y privadas del país, luego distribuidas entre los amigos y aliados del gobierno o del clan. De este modo se

11. Wieland (1998) mantiene que las reformas económicas más recientes refuerzan con frecuencia los procesos de apertura, permitiendo que los líderes democráticos desarrollen nuevas coaliciones sociales desligadas de las políticas estatistas de después de la independencia.

12. Es importante recordar, sin embargo, que los pobres que constituyen gran parte de la población africana muestran índices de participación electoral superiores a la media (Bratton, 2006: 17).

ha desarrollado una política basada en “prebendas”, una difundida “informalización de la política” que para algunos representa una absoluta “política del vientre” (Chabal e Daloz, 1999; Vallart, 1993; Joseph, 1984). Sintetizando pues, si bien algunos sectores de la sociedad civil contribuyeron a la apertura de los sistemas políticos locales, por ejemplo durante la ola de manifestaciones y protestas que sacudió el continente hacia finales de los años ochenta e inicios de los noventa, la situación general de la participación política sigue siendo crítica, como apuntaremos más adelante.

ESTADO, NACIÓN E INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

Las conclusiones en torno al impacto de las principales instituciones democráticas sobre las perspectivas de mantenimiento del nuevo régimen son igualmente ambiguas. En cuanto a las formas de gobierno, el primer problema tiene que ver con la clasificación: los expertos muestran distintas opiniones sobre la naturaleza presidencial, parlamentaria o semipresidencial de los sistemas políticos de la región. En algunos casos, por otro lado, no existe una organización con las características de un verdadero Estado moderno (como en Somalia durante los años noventa) y con frecuencia las nuevas Constituciones democráticas, aunque aprobadas, no son adoptadas, en un clima político de inestabilidad y continuas metamorfosis institucionales.

Tal vez el aspecto más importante de las instituciones políticas y del Estado subsahariano sea su fragilidad, traducida en una evidente incapacidad de gobernar, con efectos negativos sobre las perspectivas de mantenimiento y de expansión de la democracia (Joseph, 2003; Zartman, 1995). Los gobiernos centrales de la región son débiles y poco desarrollados, incapaces de afrontar los urgentes problemas que afligen a la zona, desde la pobreza crónica a la galopante crisis de sida; sobre esta última, véase de Waal (2003)¹³. El Estado subsahariano da trabajo a una media del dos por ciento de la población (frente al tres por ciento de América Latina y al siete por ciento de los países ex comunistas). En muchos casos dicho Estado tiene dificultades para exigir el pago de impuestos, el personal administrativo es insuficiente y poco cualificado y la mayor parte de las inversiones en el campo económico y social es llevada a cabo directamente por organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros que administran programas de ayuda mediante estructuras paralelas, sin ningún control por parte de los Parlamentos o de los gobiernos nacionales (Van de Walle, 2001). La integridad territorial de la región subsahariana, por último, es puesta constantemente en crisis por bandas de traficantes de seres humanos, droga, piedras preciosas, petróleo y armas. Las políticas de liberalización internacionales no han conseguido más que empeorar la situación, permitiendo que los propios señores de la guerra ejerzan un control directo y exclusivo sobre algunos territorios.

13. En este caso también existen excepciones a la regla: por ejemplo, Senegal y Uganda han actuado con prontitud y decisión, consiguiendo reducir la difusión del virus.

Especialmente crucial ha sido, desde este punto de vista, el proceso de privatización de las operaciones militares y de seguridad pública, tal vez las dos funciones más típicas y exclusivas tradicionalmente garantizadas por el Estado. Ya en el pasado, los “mercenarios” que actuaban solos u organizados en grupo ofrecían sus servicios en el área: hoy operan verdaderos ejércitos privados, mantenidos por carteles comerciales y mineros interesados en explotar las riquezas del territorio del que aseguran su preventiva “pacificación”. Muy a menudo quien gobierna tolera y alienta acuerdos semejantes para participar así en la apropiación de los recursos del país, reforzar su posición militar y política frente a potenciales adversarios y predisponer una apariencia de Estado con la finalidad de legitimar su propio poder ante la inerme población (Musah, 2002).

La concepción “occidental” del Estado, sin embargo, es difícilmente aplicable a este contexto y el dominio político, lejos de ser expresión de las normas burocráticas weberianas, es mantenido, al menos nominalmente, por líderes patrimoniales que manipulan a la fuerza los recursos disponibles, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional (Clapham, 1997)¹⁴. A esto puede añadirse que las nuevas Constituciones democráticas, aprobadas a partir de 1989, fueron escritas por lo general sin la participación de los ciudadanos que pretendían gobernar: algunas de ellas fueron formuladas directamente por políticos en el poder, otras son producto de comisiones, comités o conferencias mayormente organizadas por el régimen o dirigidas por abogados, “expertos” o líderes políticos complacientes, políticamente aliados o maleables. Las oposiciones, cuando existían, fueron a menudo reprimidas y convertidas en oposiciones inocuas (LeVine, 1997).

Si la introducción de mayores libertades políticas y civiles contribuyó a satisfacer las protestas populares y a resolver pacíficamente insurrecciones armadas de larga duración, como demuestra claramente el caso de Mozambique, no faltaron los casos en los que una mejora de la situación política, a menudo sólo parcial y de mera fachada, coincidió con la multiplicación de episodios de enfrentamientos sociales, en ocasiones armados. En Zaire o Ruanda una liberalización política incompleta influyó en el hecho de que surgieran o se tumbaran movimientos de guerrilla. En Costa de Marfil, Burundi y Congo-Brazzaville la introducción de elecciones multipartidistas produjo una polarización política que llevó a la deflagración de nueva violencia y enfrentamientos civiles. Es necesario reconocer que el vínculo entre la introducción de prácticas e instituciones democráticas y los niveles de violencia política continúa siendo problemático en toda el área: a una mayor inclusión política y, por tanto, a una mayor protección de los derechos civiles y políticos, no siempre corresponde un menor número de rebeliones violentas (Fearon y Laitin, 2003: 88). La observación histórica parece, además, confirmar que una liberalización política parcial o la introducción de regímenes semidemocráticos va generalmente asociada al surgimiento de oposiciones armadas. No obstante, es importante añadir que la situación es mejor no sólo en los regímenes

14. En este sentido hay quien augura la experimentación de nuevas formas de Estado basadas en una respuesta indígena a los problemas de disolución de los Estados tradicionales, vinculados a la irracionalización y a las obsoletas subdivisiones coloniales. El caso de Somaliland constituiría un apreciable precedente (Joseph, 2003 y Battera, 2004).

plenamente autoritarios, escudados en una mayor capacidad de represión, sino también en las democracias más consolidadas: por ello, el camino a seguir parece ser el de la consolidación efectiva de los nuevos regímenes sólo parcialmente libres, mediante la mejora de su capacidad administrativa y financiera y de la seguridad de sus aparatos estatales.

El presidencialismo continúa siendo la forma típica de gobierno: entre los países al menos parcialmente democráticos las excepciones son algunas pequeñas naciones, como las Islas Mauricio y Cabo Verde, donde el parlamentarismo se asocia a una buena *performance* democrática, y pocas otras como Sudáfrica y Botsuana cuyos regímenes presentan características institucionales de tipo mixto, parlamentarias y presidenciales, y cuyo rendimiento democrático es igualmente bueno (véase la tabla 4)¹⁵. Los regímenes presidenciales, por otra parte, se distinguen a raíz de poderes que pueden ser relativamente contenidos o bien muy amplios: la mayor parte de los países subsaharianos pertenecen a este segundo grupo, con varias disposiciones que consienten que el presidente tome decisiones clave sin la aprobación del Parlamento (van de Walle, 2003). Los regímenes africanos se pueden definir como presidenciales también en otro sentido, más profundo: más allá de las disposiciones constitucionales, el poder político está, de hecho, casi exclusivamente concentrado en las manos del presidente. Con frecuencia este último está literalmente por encima de la ley y dispone de manera directa de gran parte de las finanzas públicas¹⁶. Las reuniones del gobierno son, por lo general, raras y tienen una naturaleza en gran medida ceremonial. Una importante implicación es que el acceso clientelar a los recursos estatales está fuertemente concentrado en manos de la Presidencia y las elecciones presidenciales adquieren un papel político central, especialmente si se comparan con las legislativas.

Las normas constitucionales pueden ser útiles para identificar las formas más extremas de dicho poder que, a su vez, puede tener importantes consecuencias: cuando el mandato presidencial, por ejemplo, supera los cinco años y se permite más de una reelección, el rendimiento democrático disminuye considerablemente. Si utilizamos los índices y las categorías de Diamond (recordemos que éste distinguía entre regímenes democráticos, autoritarios de tipo electoral y autoritarios cerrados) podemos observar que, en 2001, cuando a los regímenes parlamentarios y mixtos de la región les correspondía grosso modo una forma política democrática, el régimen “típico” entre los gobiernos presidenciales del área era sólo parcialmente libre, y el presidencialismo fuerte se difundía sobre todo por entre los países autoritarios, con o sin componente electoral. Algunos cambios, sin embargo, siguen en curso: durante los años noventa, por ejemplo, se difundió la costumbre de imponer un límite de dos mandatos presidenciales consecutivos. A pesar de que la norma no haya sido siempre observada, como es el caso del

15. A estos países hay que añadir Senegal, que en 2001 abandonó el sistema presidencial profundizando el reforzamiento democrático. Asimismo Lesoto, país con un sistema parlamentario que todavía en 2001 pertenecía a los regímenes autoritarios de tipo electoral, puede ser incluido en 2002 entre los regímenes al menos parcialmente democráticos (Diamond, 2003).

16. En Kenia, en 1992 la Oficina de la Presidencia daba trabajo a más de 43.000 personas, un sexto del total de la burocracia del Estado (World Bank, 1992).

presidente de Namibia, Sam Nujoma, los intentos de eliminarla provocaron vibrantes protestas por parte de la opinión pública y de algunos países extranjeros (van Walle, 2002: 76).

TABLA 4.
SISTEMAS DE GOBIERNO EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA (2004)

Presidencialismo	Semipresidencialismo	Parlamentarismo	Régimen no clasificable o Constitución no activa
Benín	Madagascar	Cabo Verde	Guinea-Bissau
Botsuana	Santo Tomé y Príncipe	Islas Mauricio	Níger
Burundi	Mali	Senegal	
Comores	Sudáfrica	[Lesoto]	
Ghana			
Liberia			
Namibia			
Malawi			
Mozambique			
Seychelles			
Sierra Leona			
[Zambia]			
[Kenia]			
Media niveles de democracia: 3	Media niveles de democracia: 2,4	Media niveles de democracia: 1,9	
Sin regímenes con un partido dominante o con componentes tradicionales: 3		Sin regímenes con un partido dominante o con componentes tradicionales: 1,7	

Fuentes: Cheibub, Przeworski y Saiegh (2004) y Europa Publications (2004). Tras los corchetes los regímenes de partido dominante o con fuertes componentes tradicionales.

Una nota referente a los sistemas de partidos de la región. Por norma los partidos que han ganado las primeras elecciones democráticas han permanecido más tiempo en el poder: el sistema de partidos más difundido consiste hoy en día en un partido dominante acompañado de numerosos partidos menores, a menudo propensos a la inestabilidad (van de Walle, 2003)¹⁷. Los partidos políticos africanos, por lo general, no sabrían garantizar una representación política eficaz, dadas la preponderancia del clientelismo y la ubicación rural de gran parte de la población, a la que resulta difícil acceder e influenciar. Igualmente débil sería la función agregadora, por la falta de claras plataformas políticas y de diversidad de proyectos. A su vez, los (pocos) grupos que han organizado una campaña electoral basándose en programas ideológicos precisos no han sido premiados por los electores. Es el caso, por ejemplo, de los partidos marxistas del África francófona, cuyo apoyo en las urnas ha sido casi nulo. La función de reclutar y de formar líderes políticos, salvo alguna importante pero

17. En el mismo sentido, subrayando la debilidad de los partidos políticos y de los sistemas de partidos de la región, véase Monga (1997); van de Walle y Butler (1999) y Fomunyoh (2001).

puntual excepción, ha sido también insuficiente (Randall e Svåsand, 2002: 33)¹⁸. De hecho, abunda la situación contraria, es decir, que los hombres políticos hayan fundado y utilizado los partidos como instrumentos personales para impulsar su carrera política y llegar al poder.

Los partidos de la oposición son muchas veces pequeños y contribuyen a la fragmentación del sistema político: no es raro que quien sea elegido de entre sus filas pase con el tiempo a la parte de los que hayan ganado. Aunque lo mismo sucede entre partidos de mayor tradición. En Senegal, las elecciones de 2000 las ganó el partido de la oposición cuyas filas parlamentarias fueron engrosadas inmediatamente por grupos de representantes del partido socialista que acababa de perder, entre los que se encontraban no pocos líderes ancianos. Resumiendo, los partidos políticos del África subsahariana se muestran especialmente “débiles”. Entre las causas de su fragilidad recordemos, además de los efectos negativos de la pobreza, las fracturas políticas y sociales predominantes en la región, ligadas en gran parte a entidades etnolingüísticas y religiosas, y la competición política en gran manera influida por el fuerte presidencialismo y por el omnipresente arraigo del clientelismo. Estos factores dificultan también la creación de partidos de la oposición fuertes, favoreciendo que nazcan formaciones electorales en torno a las figuras políticas más importantes, propensas a cerrar acuerdos ventajosos con el vencedor de turno (Randall e Svåsand, 2002: 37-47)¹⁹.

CULTURA POLÍTICA, LEGITIMIDAD Y FACTORES RELIGIOSOS

Los datos parciales de los que disponemos indican que en el África subsahariana el apoyo a la democracia es relativamente amplio, aunque haya disminuido ligeramente en los últimos años y sea común la insatisfacción por la *performance* de las economías nacionales (véase la tabla 5)²⁰. También para esta área parece valer el principio por el que la legitimación, en un régimen democrático, no se alcanza sobre todo gracias al éxito económico (Bratton y Mattes, 2000; Diamond, 2001). El consenso democrático sería además sensible al logro de ciertos

18. Entre las excepciones, el African National Congress, en la República Sudafricana, el United National Independence, en Zambia, y el Chama Cha Mapinduzi en Tanzania.

19. Las instituciones, sin embargo, desempeñarían un papel en los procesos de democratización a través de dinámicas de aprendizaje. Si un país ha tenido ya experiencias con elecciones de tipo electoral es más probable que aprenda y que en el futuro adopte comportamientos democráticos. Según una investigación reciente, por ejemplo, el número de elecciones llevadas a cabo entre 1960 y 1990 en algunos países subsaharianos tuvo un impacto sobre sus posibilidades de democratización en los noventa: cuanto más numerosas las elecciones, independientemente de su carácter democrático, mejores los resultados del proceso de transformación política (Bratton y van Walle, 1997). Esto implica que el gran número de elecciones celebradas en la región en el último decenio constituye un patrimonio de experiencias que puede apoyar en última instancia el proceso de democratización.

20. Entre 1999 y 2001, el 69 por ciento de quienes respondían consideraba que la democracia era preferible a otras formas, no democráticas, de gobierno. La proporción desciende al 63 por ciento entre 2002 y 2003, en una muestra ligeramente diversa (Bratton, 2004) y baja al 61 por ciento en 2005 (Bratton y Cho, 2006). El 58 por ciento está parcial o plenamente satisfecho con el modo en que la democracia funciona en su país en 2001, mientras que en 2003 la cifra desciende al 54 por ciento y se rebaja dos años más tarde al 48 por ciento. En el mismo año sólo el 34 por ciento se declara muy o bastante satisfecho con las condiciones de la economía nacional (Bratton y Cho, 2006; Afrobarometer, 2002a).

objetivos, de tipo básicamente político, como la protección de algunos derechos elementales y la capacidad de asegurar la paz interna. Los resultados son aún más significativos en tanto que la actitud a favor de la democracia es común en todos los estratos sociales y en todas las edades²¹. Se tendría la tentación de concluir que el apoyo democrático está difundido y, por tanto, ya arraigado en la cultura política local, pero la aparición de la democracia en el área es demasiado reciente para dar crédito a esta interpretación. Se trataría, por el contrario, de una adhesión bastante superficial, de apoyo práctico a cambio de algunos beneficios, a menudo políticos, como se ha visto; apoyo en el que también juegan su papel los mecanismos de identificación con ciertos partidos, especialmente con los ganadores y, como consecuencia, las expectativas vinculadas a la distribución de los bienes materiales, sobre todo medios de subsistencia y puestos de trabajo (Bratton, 2002). La desilusión, que lentamente estaría extendiéndose, quedaría mitigada en algunos casos por la frecuente alternancia de gobiernos que infunde algún optimismo y una nueva confianza en la democracia (Bratton, 2004).

Igualmente compleja es la valoración del papel de la sociedad civil en los recientes procesos de transformación política. Monga (1997), por ejemplo, subraya el desencanto y el escaso interés que acompañó la crisis de los experimentos democráticos en Gambia y Níger y la simpatía que sus ciudadanos manifestaron hacia los militares que se rebelaron contra gobiernos democráticamente elegidos. Desinterés que derivaría de la sistemática exclusión de los beneficios del cambio político. Del mismo parecer son Chabal y Daloz (1999), para quienes las teorías de sociedades civiles subsaharianas vivas y palpitantes son básicamente erróneas debidas a prejuicios ideológicos de análisis superficiales y excesivamente optimistas. Herbst (2001), por último, señala cómo el impacto de la prolongada crisis económica redujo los recursos disponibles, entre ellos el acceso a instrumentos de telecomunicación, ordenadores, publicaciones y personal cualificado²². Para otros, no obstante, la perspectiva es más luminosa y la sociedad civil africana podría contribuir a una sólida democratización, incluso mediante algunos aspectos de la tradición política local que parecen perfectamente compatibles con la democracia: por ejemplo, la obligación que recae sobre los jefes políticos de una “administración fiable” frente a sus súbditos, una especie de “disciplina constitucional” controlada por los ciudadanos que tienen derecho a rebelarse en caso de graves violaciones (Owusu, 1997). Para estos autores existe, al menos en algunos países, una cultura tradicional en la que prevalecen

21. No sólo la mayor parte de los africanos sabría dar un significado preciso a la palabra “democracia”, sino que más de la mitad la identifica con la libertad, especialmente de expresión, o con el gobierno del pueblo, dos conceptos típicamente liberales (Afrobarometer, 2002b). No faltan, sin embargo, otras interpretaciones: en Mozambique una mayoría de entrevistados identifica la “verdadera democracia” con un sistema de igualdad de acceso a la vivienda, la instrucción y los recursos alimenticios (Centro de Estudios de Población, 2002, citado en Carbone, 2005: 196). De un modo más general, no se puede excluir que el concepto esté vinculado a visiones similares pero alternativas de la política, basadas en concepciones colectivistas y populistas, contrarias a la versión liberal (Bratton, 2002: 6).

22. Para Widner (1997), a finales de la década de los ochenta, se produjo una amplia proliferación de grupos y organizaciones civiles en el continente que, sin embargo, tuvo un impacto mínimo en la competición política. Entre los motivos de ello, la baja densidad de afiliación, el escaso control de los votos de los afiliados por parte de los líderes y, una vez más, una inadecuada penetración en las áreas rurales, en las que reside la mayor parte de la población.

elementos de confianza recíproca, tolerancia, pluralismo, una cierta separación de poderes y la responsabilidad de los líderes ante los gobernados, todos ellos elementos que constituyen condiciones importantes para la democracia (Smith, 2002, para Mali; un argumento similar es desarrollado por Carroll y Carroll, 1997 respecto a las Islas Mauricio).

TABLA 5.

SATISFACCIÓN POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN ALGUNOS PAÍSES DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA (2005)

Pregunta	País	Respuestas positivas: porcentaje que responde mucho o bastante
En general, ¿hasta qué punto le satisface el funcionamiento de la democracia en su país: mucho, bastante, no mucho o nada?	Botsuana	59
	Ghana	70
	Lesoto	40
	Malawi	26
	Mali	57
	Namibia	69
	Nigeria	26
	Sudáfrica	63
	Tanzania	37
	Uganda	51
	Zambia	26
	Zimbabue	14
	Media	45
En general, ¿cómo describiría sus actuales condiciones de vida: muy buenas, bastante buenas, malas, pésimas?	Botsuana	20
	Ghana	25
	Lesoto	16
	Malawi	17
	Mali	16
	Namibia	43
	Nigeria	45
	Sudáfrica	47
	Tanzania	22
	Uganda	35
	Zambia	26
	Zimbabue	7
	Media	27

Fuente: Bratton y Cho (2006).

Tal vez sea más creíble una posición intermedia, según la cual existe una sociedad civil subsahariana, aunque débil y abrumada por problemas financieros, organizativos y operativos que dificultan la posibilidad de representar, promover y proteger los intereses de los ciudadanos. Ciertamente es que el alza de la protesta política en casi todos los países del área, desde finales de los ochenta, contribuyó a la transformación de los sistemas políticos locales, exigiéndose gobiernos más transparentes, responsables y democráticos. A partir de 1990 el número de protestas políticas aumentó de manera drástica, a la par que la afirmación de los derechos civiles y políticos anteriormente negados (véase Makumbe, 1998: 309-310, para

la descripción de algunos de los episodios más relevantes). Bratton y van de Walle (1997), en su importante estudio sobre las transiciones democráticas en la región, defienden que las masivas protestas políticas, convertidas en movimientos a favor de la democratización, fueron una premisa importante para las “elecciones democráticas constitutivas” de finales de los ochenta y del inicio del siguiente decenio.

Estas opiniones, en parte discordantes, confirman la impresión de que, en el África subsahariana, al igual que en los demás países, la cultura política contiene elementos diversos, algunos favorables y otros contrarios a la totalidad de valores, creencias y actitudes asociadas, por lo general, a la democracia en occidente. El despuntar de unos o de otros depende de una compleja serie de factores, histórica y geográficamente determinados, que pueden cambiar con el tiempo. Si la democratización es favorecida por una sociedad civil, en la que las personas y los grupos tienen identidades e intereses diversos que, a pesar de ello, se entrelazan y contrarrestan y en la que se valoriza la cooperación y el diálogo, como nos muestran Dahl y la escuela del pluralismo, entonces la situación africana no puede dejar de inducirnos a un moderado pesimismo. No faltan, sin embargo, razones para confiar en una evolución favorable, al menos en algunos casos, como demuestran los recientes acontecimientos en Sudáfrica, Senegal y Ghana (Haynes, 2001).

La identidad étnica es otro elemento crucial para la construcción y la articulación de estructuras políticas africanas: exceptuando la India, las quince sociedades más fragmentadas desde el punto de vista étnico se encuentran todas ellas en el África subsahariana (Elbadawi y Sambanis, 2000: 8). Ahora bien, tal fragmentación no implica necesariamente índices de conflicto social más elevados ni que los problemas para la instauración de nuevos regímenes democráticos sean más graves. De hecho, algunos estudios recientes, de tipo comparado, mantienen que la incidencia de conflictos entre distintas etnias que conviven entre sí es prácticamente nula (Fearon y Laitin, 1996: 717). El despuntar de la violencia y de los conflictos armados, por el contrario, es más probable en sociedades relativamente homogéneas: un grupo étnico mayoritario, y por tanto dominante, acrecienta el potencial de conflicto por el temor de exclusión política y social que inflinge en la minoría (Collier, 2000). Si por el contrario coexisten en un país numerosos grupos étnicos de dimensiones similares, el riesgo de violencia es mucho menos intenso. El aspecto crucial parece ser la acción de líderes políticos interesados en explotar el potencial conflicto étnico a fin de instalarse en el poder o de mantenerlo (Carbone, 2005).

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Costa de Marfil: a finales de los noventa, las turbulencias étnicas que provocaron una seria inestabilidad política fueron causadas, simultáneamente al regreso del multipartidismo, por la redefinición de los equilibrios políticos anteriores. Tales equilibrios se basaban en la alianza entre el dictador Houphouët-Boigny, de etnia baulé, y la población no marfileña, emigrada al norte del país, cuyo ingreso fue favorecido por facilitar la reconversión de los bosques en zonas cultivables para ser transformadas en rentables plantaciones de cacao. El derrumbe de los precios internacionales del cacao y la crisis más general de la economía del país empujaron al sucesor de Houphouët-Boigny, Konan-Bédié, a realizar una política de defensa de la identidad nacional, dirigida a

quitarles el derecho de voto y de propiedad a los emigrantes que ya para entonces constituían un cuarto de la población. La reacción fue violenta: Konan-Bédié fue depuesto por un golpe de Estado, pero el nuevo presidente, Laurent Gbagbo, reinició la política discriminatoria vinculada a la identidad nacional, causando de nuevo una rebelión armada por parte de las tropas regulares del norte del país que terminó, en 2002, en una verdadera guerra civil. En este resultado dramático contribuyeron de manera crucial las luchas personales en las que estaban inmersos algunos representantes de la élite política, quienes procuraban asegurarse el control de las instituciones. Las políticas discriminatorias contra los emigrantes fueron usadas, por ejemplo, para obstaculizar el avance de Alassane Ouattara, representante del norte musulmán, a quien Bédié acusaba de ser originalmente de Burkina Faso, a fin de justificar su inelegibilidad para el cargo de presidente²³.

¿Qué decir, por último, del impacto del factor religioso sobre los actuales procesos políticos? El cristianismo y el islamismo son preponderantes en el área hoy en día, mientras que las confesiones de tipo animista y, más en general, las de carácter tradicional, que dominaban hasta hace sólo pocos decenios, están retrocediendo claramente. En contra de la percepción común, por otro lado, el cristianismo se está expandiendo con fuerza: mientras que en los años cincuenta las religiones tradicionales y el islamismo eran todavía las religiones principales, en la actualidad son cristianos casi la mitad de los africanos (Jenkins, 2002; Clarke, 1993; Crim, 1989)²⁴. La difusión del cristianismo favorecería las perspectivas de democratización (Huntington, 1995). En el curso de la “tercera ola” las iglesias desarrollaron un papel positivo en la promoción de la democratización en un gran número de países africanos, criticando los regímenes autoritarios en el poder e instando a la apertura de nuevos espacios políticos (Wiseman, 1997 y Gifford, 1995)²⁵. La reciente difusión de movimientos cristianos fundamentalistas, en Occidente al igual que en los países en desarrollo, y las tendencias autoritarias que les caracterizan, proyectan, sin embargo, inquietantes sombras sobre el futuro. Por su parte, las religiones tradicionales africanas no parecen ser un obstáculo para los procesos de secularización del Estado y de separación entre la esfera política y la religiosa. Se ha hablado, es cierto, sobre la concepción tradicional de autoridad política en la región y se han subrayado algunas dificultades relativas a su compatibilidad con

23. Los sucesos recientes en Costa de Marfil nos ayudan a entender la gran diversidad lingüística, étnica, política y cultural del África contemporánea. Las observaciones que se han utilizado en este artículo son, por su carácter general, una primera aproximación al estudio de procesos realmente complejos en los que los elementos estructurales, a los que se ha dado mayor énfasis, interactúan con factores políticos y sociales motivados por ideologías y visiones concretas del mundo y movidos, a menudo, por creencias y ambiciones personales que terminan influyendo de manera decisiva en los resultados históricos.

24. Según Clark y Crim, al inicio de los años noventa, alrededor del 40 por ciento de la población subsahariana profesaba el cristianismo, una cifra más o menos equivalente a los fieles musulmanes. Aun aceptando estos datos con gran cautela, la hipótesis de una fuerte difusión del cristianismo parece en general plausible.

25. Son inolvidables, entre otras, las figuras de Desmond Tutu en Sudáfrica y de James Chiona en Malawi. Se debe añadir que en algunos países las distintas Iglesias fueron ineficaces en la promoción de la democracia, mientras que en otros, como en Ruanda, estuvieron relacionadas con graves violaciones de los derechos humanos. Para algunos, finalmente, los principales líderes religiosos habrían desarrollado, con el tiempo, vínculos privilegiados con el poder político y no habrían visto favorablemente procesos de profunda transformación política, limitándose a apoyar cambios sólo cosméticos.

las modernas interpretaciones de la democracia. Por ejemplo, sería discordante con la cultura política subsahariana la norma de que el elegido deba representar tanto a los propios electores como a las necesidades del país, dado el carácter directo e interesado de las relaciones tradicionales entre los políticos y sus votantes (Chabal, 1998: 297). No obstante, tales dificultades no parecen decisivas, a raíz de la coexistencia de múltiples y contradictorios modelos de relación entre los gobernantes y sus clientes, modelos cuyo efecto sobre un sistema democrático sigue siendo indeterminado. El propio islamismo ha desarrollado en la región elementos de sincretismo religioso y cultural sin que resultaran incompatibles con la afirmación de regímenes democráticos de países como Senegal y Mali. En este último, por ejemplo, el vínculo entre fe islámica y sociedad civil se caracteriza por modelos de reciprocidad, confianza y solidaridad social y de una fuerte tolerancia religiosa (Docking, 1997, y Smith, 1993).

EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Sin duda, la herencia de la experiencia colonial no favoreció la posibilidad de que arraigasen las instituciones y las prácticas democráticas. En primer lugar a causa de una geografía política impuesta por las potencias occidentales, ajena a las características étnicas y demográficas de las sociedades locales, que finalizó con profundizar la heterogeneidad. A su vez, debido a la rápida concesión de la independencia, sin que pudiese madurar entre los africanos la formación y la experiencia necesarias para el buen funcionamiento de aparatos estatales modernos y para una mayor familiaridad con elecciones, Parlamentos, gobiernos y partidos políticos. Faltaban, pues, o bien eran muy débiles, las tradiciones constitucionales, el pluralismo cívico, la competición política institucionalizada y la participación popular a escala nacional. Ahora bien, el mayor problema fue probablemente la organización económica de los nuevos países africanos, que se resentía de las decisiones impuestas durante el periodo colonial, en el que la producción agrícola para el consumo doméstico fue sustituida por productos comerciables en mercados extranjeros, como café, té o cacao, muy vulnerables a la fluctuación de los precios internacionales. A raíz de ello, los campesinos africanos, ya de media muy pobres, a menudo no tuvieron la posibilidad de hacer frente a los ocasionales desplomes de la demanda (Carbone, 2005: 43-51).

El impacto de los factores internacionales en el área es hoy en día muy amplio, afectando al ámbito económico, político y social. Ya brevemente después de la independencia, las condiciones económicas internacionales se deterioraron: la coyuntura positiva de los años sesenta desapareció, de hecho, en la década siguiente, cuando el *shock* petrolífero, el declive de los precios de los pocos productos de los que dependían las economías africanas y un imparable endeudamiento público llevaron a los países africanos a una profunda crisis. Por otra parte, los Estados del área dependen poco de la tasación directa de los ingresos: aun hoy un buen número de ellos cuenta con recaudaciones inferiores al veinte por ciento del producto interior bruto, contra el cuarenta o más que ingresan de media los países económicamente avanzados (van de Walle, 2001: 183). Para las naciones africanas es más importante

la explotación de recursos minerales o petrolíferos y, con frecuencia, especialmente las ayudas y la financiación extranjeras. La elevada cuota del presupuesto estatal proveniente de esta clase de entradas ha tenido consecuencias negativas, reduciendo al mínimo la dependencia del Estado respecto a la sociedad y contribuyendo a aminorar la urgencia de construir aparatos burocráticos bien organizados y que funcionen.

El papel de los factores internacionales culmina tal vez con la caída del Muro de Berlín y el final de la guerra fría entre las dos superpotencias. Muchos de los regímenes dictatoriales apoyados por una parte o la otra se encontraron repentinamente ante el hecho de que no podían contar con las ayudas militares y económicas indispensables para su supervivencia. La crisis económica y la imposibilidad de mantener vivo el sistema clientelar, mediante el que se compraba el apoyo interno, empujaron a algunos dictadores a promover una apertura política, a menudo de conveniencia. Asimismo, otros países occidentales y las organizaciones internacionales de crédito apoyaron reformas de tipo democrático e instaron a los países africanos a innovar sus gobiernos a fin de acceder a las ayudas económicas (Clapham, 1996; Hyden, 1992). En sí, los gobiernos occidentales y las organizaciones internacionales terminaron por controlar directamente gran parte de las inversiones y de las políticas económicas, subrogando, donde éstas existían, a las instituciones locales democráticamente elegidas, hecho que, obviamente, no ayudó a su credibilidad.

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las instituciones financieras y gubernativas más importantes vincularon las ayudas y la financiación a la mejora del sector público y a la liberalización de las economías de los países beneficiarios. En la mayoría de los casos, no obstante, el éxito de estas reformas tardó en llegar. La polémica sobre los modestos o inexistentes resultados de las reformas económicas estructurales contribuyó a reforzar el impulso hacia la liberalización política que empezaba a emerger en diversas sociedades africanas. Era necesario reformar los aparatos administrativos a fin de reducir la corrupción, garantizar la legalidad de los derechos humanos y afianzar la justicia, abriendo al mismo tiempo los sistemas políticos para asegurar una mayor responsabilidad de los elegidos, aumentar el pluralismo de la sociedad civil y lograr que las instituciones fueran más representativas. De este modo, las cláusulas de promoción de la “good governance” fueron comunes en los acuerdos alcanzados para las concesiones de nuevas financiaciones y ayudas a los países africanos (Barkan, 2000: 231). Los donantes internacionales, si bien no iniciaron las reformas políticas africanas, al procurar influir en su resultado, definieron indudablemente su vocabulario y estándares de referencia.

Igualmente, las organizaciones no gubernamentales sufren limitaciones que obstaculizan su actividad y dañan su imagen. En primer lugar no son responsables ante las comunidades en las que operan, sino sólo ante sus respectivos gobiernos o ante agencias que se encuentran en los países de origen. Por ello es difícil pedirles que sean transparentes o que actúen correctamente y, asimismo, que pueda nacer o reforzarse, allí donde operan, una cultura de respeto y de confianza mutua. A su vez, por lo general, no disponen de medios adecuados para desempeñar su misión y dependen fuertemente de financiaciones extranjeras: deben, por tanto, adaptar los programas políticos, sociales y civiles a las sugerencias de los benefactores. De ahí que se dé un “síndrome de dependencia” que no ayuda a la autonomía

de la actividad emprendida; este síndrome, por otro lado, limita frecuentemente las intenciones de las ONG en cuanto al respeto de los derechos humanos y la democratización, vistas con inquietud por gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales ante el temor de que las autoridades en el poder reaccionen con hostilidad (Makumbe, 1998).

Es por ello por lo que existen diversas opiniones sobre la importancia de la intervención internacional. Para algunos autores, los programas de reformas impuestos por la comunidad internacional debilitaron los gobiernos africanos y precipitaron una nueva crisis democrática (Bienen y Herbst, 1996; Baylies, 1995). Para otros, fueron el motor más potente de reforma política de la región (Hearne, 1999; Decalo, 1992). Otros analistas, por su parte, consideran que el papel de las potencias extranjeras fue incierto y contradictorio (Diamond, 1997). Un estudio reciente sobre el efecto de las ayudas para el desarrollo, concedidas a los países africanos durante los años noventa, confirma que los países más democráticos de la región son también aquellos que recibieron mayor asistencia; regímenes autoritarios y Estados marcados por la guerra recibieron, por lo general, financiación limitada (Goldsmith, 2001a: 428). El impacto de las ayudas internacionales sobre el índice de democracia, examinado junto a factores que pueden tener efecto sobre el éxito democrático, sería pues positivo pero poco influyente (Goldsmith, 2001b; Galich, 1997) como fue sugerido por Huntington (1995), entre otros, con anterioridad.

Para concluir, observamos que la falta de compromiso por parte de los países de Occidente en el África subsahariana, que tuvo lugar a mediados de los noventa, disminuye hacia el final de la década. Las principales manifestaciones del cambio fueron la intervención británica en Sierra Leona (2000), la francesa en Costa de Marfil (2002) y el interés americano en los intentos de solucionar la crisis liberiana (2003), sudanesa (2003-2004) y somalí (2006-2007). La reducción de los conflictos en la que contribuyeron estas iniciativas, por otro lado, debe ser evaluada junto con la interferencia de algunas naciones occidentales en los acontecimientos internos de muchos países africanos, a través del apoyo a los gobiernos o a los rebeldes en lucha contra ellos. Aumentaron asimismo las iniciativas regionales, desde aquellas como las del Ecomog en Liberia (1990), Sierra Leona (1998) y Costa de Marfil (2003), a aquellas otras que vieron a Sudáfrica intervenir con sus tropas en Burundi (2003) y en el Congo (2003), así como la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en Somalia (2003-2004), las cuales marcan el fin de la fase de no intervención típica de los años precedentes (Carbone, 2005: 160).

CONCLUSIONES

El análisis de los estudios y de los sucesos más recientes nos permite formular algunas observaciones iniciales sobre la relación entre los procesos de apertura política desarrollados en la región y una serie de variables económicas y sociales, tanto domésticas como internacionales. Merece la pena destacar aquí que estas observaciones implican un cierto grado de simplificación de las premisas y de los acontecimientos estudiados. El análisis debe ampliarse en cada caso mediante un estudio más detallado de los acontecimientos concretos de cada país y de sus protagonistas que, como ya se ha apuntado, desempeñan, no

por casualidad, un papel crucial a la hora de determinar los resultados específicos de procesos políticos complejos y articulados diversamente. Estas primeras conclusiones, por otro lado, nos permiten llevar a cabo un juicio preliminar sobre el papel desempeñado, tanto en la totalidad del área como en cada país, por algunos factores que, según los analistas, contribuyen de forma relevante en el resultado de los procesos de transformación política y en el nacimiento de regímenes más democráticos, en África y en el resto del mundo.

Los acontecimientos políticos que caracterizaron la región subsahariana, a partir de finales de los ochenta, fueron hechos sin precedentes. La reciente historia de un número siempre mayor de gobiernos ha sido marcada por liberalizaciones y, en algunos casos, verdaderas democratizaciones. Y si todavía en 2006, cerca de 25, de los 48 regímenes subsaharianos, eran parcial o totalmente autoritarios, casi el mismo número había engrosado las filas de las naciones al menos en parte democráticas. A finales de la década de los ochenta, la situación era mucho peor: sólo dos países, las Islas Mauricio y Botsuana, podían ser considerados democracias plenas y, tal vez, otros dos, Gambia y Senegal, democracias incompletas. Incluso los regímenes en los que la democracia no se ha afianzado, se sienten hoy obligados a prestarle atención, celebrando elecciones periódicas, aunque manipuladas en los contenidos y en la práctica. En la actualidad quedan pocos regímenes en los que los partidos políticos estén del todo ausentes o en los que se admita un solo partido. Una apariencia de democracia y de elecciones democráticas es considerada hoy necesaria incluso por los dictadores más acérrimos. Esto se debe, por un lado, a la fuerza moral que la democracia ha terminado adquiriendo al sur del Sahara; por otro lado se debe también al convencimiento de que hay más probabilidades hoy en día de que las sanciones internacionales, políticas y militares recaigan sobre quienes no respeten los nuevos cánones políticos, centrados al menos de manera formal en el estilo democrático de gobernar.

Ahora bien, la popularidad de los regímenes autoritarios con características electorales debe hacernos reflexionar sobre los límites de los procesos de apertura política en la región. Sabemos que no bastan las elecciones para definir como democrático un régimen: éstas deben ser, como mínimo, periódicas, libres de cualquier tipo de impedimento para quienes participan, como candidato o como elector, dirigidas hacia toda la población adulta e imparciales en los procedimientos que preceden la votación, así como en el recuento de votos. Deben pues satisfacerse toda una serie de garantías: en primer lugar, la libertad de pensamiento, tanto en su formación (lo que implica la existencia de medios de comunicación libres e independientes del control del gobierno y una pluralidad de fuentes informativas), como en su expresión y comunicación ante los demás; por otra parte debe garantizarse la libertad de organización para proteger los propios intereses o la propia identidad, ya sea en la sociedad como en la esfera política; y asimismo las libertades que sirven de apoyo a los puntos anteriores, como poder moverse libremente en el interior de un país. Ya se ha observado, por lo demás, que incluso en los casos en los que un genuino multipartidismo constituía un punto de arranque del proyecto de reforma política, a menudo el partido que vence las primeras elecciones logra mantenerse en el poder durante más tiempo, reduciendo o anulando los espacios políticos y civiles de la oposición y reprimiendo los derechos. La alternancia

política queda pues como un indicador importante de la consolidación democrática, en esta región más que en otras.

También en el área subsahariana las democracias más completas se encuentran, por lo general, entre los países con un nivel socioeconómico más elevado. Algunos países pobres, sin embargo, han podido iniciar un recorrido democrático cuya continuidad debe aún verificarse. La pobreza endémica y la modesta *performance* económica de los últimos años, junto con las emergencias más recientes, como la difusión del sida, ciertamente no invitan al optimismo. Tampoco son alentadoras las modestas reformas económicas emprendidas por los nuevos regímenes, obstaculizadas por las precarias condiciones de la economía y por una serie de factores sociales y políticos, internos y externos. Sobreviven, por ejemplo, las coaliciones sociales en las que se fundaba el *ancien régime*, contrarias frecuentemente a reformas importantes, y se vienen imponiendo drásticos cortes a los presupuestos estatales por parte de las organizaciones financieras internacionales, estrechando los márgenes de maniobra y de intervención. Las clases subordinadas son pobres o poco organizadas y participan en una distribución clientelar de los recursos económicos y políticos, especialmente locales.

Se ha hablado ya de los perniciosos efectos del presidencialismo “fuerte”, establemente asociado a los regímenes políticos en su mayoría autoritarios. No obstante, es la fragilidad de las instituciones estatales lo que constituye el elemento crucial que explica la ineficacia de muchos de los nuevos gobiernos democráticos. Los aparatos estatales del África subsahariana, casi todos ellos minúsculos, están empobrecidos y no suelen ser capaces de cobrar los impuestos o de favorecer las inversiones cruciales para el país; tampoco suelen ser capaces de desempeñar la razón esencial de su existencia como Estado, asegurar el orden doméstico y la integridad territorial. Por el contrario, ambos son a menudo sacudidos por bandas armadas, financiadas por los potentes carteles comerciales o mineros interesados en la explotación de las innumerables riquezas del continente. Los partidos políticos, por otro lado, son con frecuencia instrumentos para la afirmación electoral de personalidades relevantes y sirven fielmente a los intereses de la clientela. No obstante, también en la región subsahariana se está manifestando un efecto de aprendizaje institucional y una mayor participación electoral se puede interpretar como una creciente adhesión a los principios y a las costumbres democráticas. Con el número de elecciones puede aumentar a la larga el consenso a favor del nuevo régimen.

Los sondeos a los que nos hemos referido aquí confirman que, a pesar de las muchas dificultades, el consenso democrático existe y es sorprendentemente sólido. La insatisfacción sobre la *performance* económica no se traduce directamente en una crisis de confianza respecto a las instituciones democráticas: como en los casos más claros de consolidación, también en el área subsahariana el consenso para la democracia no tiene tan sólo un carácter instrumental, sino que indica asimismo una cierta adhesión a la nueva forma de gobierno. Esta adhesión depende de la protección de algunos derechos fundamentales, aunque también de mecanismos de identificación con los partidos en el poder. En los últimos años, además se está dando cierta desilusión

ante el escaso rendimiento democrático. Al mismo tiempo, en la sociedad civil se alternan elementos de fuerza y dinamismo con otros de debilidad y discontinuidad. De hecho, la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil presentan graves problemas financieros y organizativos que limitan su alcance y su potencial utilidad. Algunos autores, sin embargo, han considerado las protestas masivas que tuvieron lugar al principio de los noventa como un elemento decisivo en cuanto al desencadenamiento de procesos de liberación que condujeron, en muchos casos, a la instauración de nuevos regímenes políticos más abiertos. A su vez, más allá de las valoraciones generales sobre la naturaleza y la potencialidad de la sociedad civil, en algunos países dicha sociedad favoreció sustancialmente los procesos de transformación democrática como, por ejemplo, en Sudáfrica y en Senegal.

La herencia colonial, por otro lado, tuvo efectos negativos sobre la difusión de la democracia. El final de la guerra fría condujo a una nueva distribución de las ayudas económicas y militares, ya no determinadas por la lucha entre las dos superpotencias sino, de entrada, por el imperativo de mantener la supremacía global conquistada por la democracia y, a su vez, por la necesidad de reforzar una organización económica de tipo capitalista, definida esencialmente por los principales gobiernos occidentales y por las organizaciones económicas internacionales más importantes, siguiendo a menudo los preceptos del credo neoliberal impuestos a finales del siglo pasado. Las consecuencias no son fáciles de evaluar y en algunos casos no han sido alentadoras. Si podemos hablar de un resultado positivo, éste ha sido ciertamente marginal y secundario. Tampoco han actuado mejor las organizaciones no gubernamentales, con frecuencia demasiado dependientes, respecto a su organización y finanzas, de sus países de origen y con sólo tenues contactos con las comunidades locales a las que deberían haber asistido.

En general, estas reflexiones conducen a una valoración esencialmente cauta de las perspectivas políticas de la región. Son muy patentes las enormes dificultades que la población del África subsahariana deberá afrontar para garantizar la supervivencia de nuevos y frágiles regímenes democráticos y sobre todo para fortalecerlos, desarrollar y afianzar la protección de los principales derechos políticos y civiles, y para garantizarse importantes objetivos, también sociales y económicos, como economías que aseguren un nivel de subsistencia mínimo. Aunque haya ido mejorando en los últimos tiempos, la problemática prestación económica no incita al optimismo. Ahora bien, sorprende la vitalidad y el entusiasmo que ha permitido que algunos países paupérrimos iniciasen experimentos democráticos de gran relieve, justo donde las teorías más acreditadas no parecían albergar la más mínima esperanza. Quedan, por supuesto, dudas sobre la duración de tales regímenes y sobre su capacidad de progresar. De todas las condiciones para una democratización convincente, sin embargo, la más importante parece ser la voluntad de los protagonistas políticos, élite y ciudadanos, de iniciar el proceso y de lograr que éste perdure. La reciente experiencia de algunos gobiernos de la región indica que una cierta continuidad y una digna *performance* democrática son, de hecho, ya posibles.

Referencias

- Afrobarometer. 2002a. «Popular attitudes to democracy, selected African countries, 1999-2000». <http://www.afrobarometer.org/papers/AfrobriefNo1.pdf>
- Afrobarometer. 2002b. «Key findings about public opinion in Africa». <http://www.afrobarometer.org/papers/AfrobriefNo1.pdf>
- Ake, Claude. 1996. *Democracy and development in Africa*. Washington, D.C.: Brookings Institution.
- Barkan, Joel. D. 2000. «Protracted transitions among Africa's new democracies», *Democratization* 7: 227-43.
- Battera, Federico. 2004. «State and democracy-building in subsaharan Africa: the case of Somaliland. A comparative perspective», *Global Jurist Frontiers* 4: article 1. <http://www.bepress.com/gjfrontiers/vol4/iss1/art1>
- Bayart, Jean-Francois. 1993. *The state in Africa. The politics of the belly*, Londres: Longman.
- Baylies, Carolyn. 1995. «Political conditionality and democratization», *Review of African Political Economy* 65: 321-337.
- Berdal Mats, y David M. Malone (eds.) 2000. *Greed and grievance. Economic agendas in civil wars*. Boulder-Londres: Linne Ryenner.
- Bienen Henry, y Jeffrey Herbst. 1996. «The relationship between political and economic reform in Africa», *Comparative Politics* 29: 23-42.
- Bratton, Michael. 1998. «Second elections in Africa», *Journal of Democracy*, 9: 51-66.
- Bratton, Michael. 2002. «Wide but shallow: popular support for democracy in Africa», Afrobarometer Working Paper 19, <http://www.afrobarometer.org/papers/>
- Bratton, Michael. 2004. «The "alternation effect" in Africa», *Journal of Democracy* 15: 147-58.
- Bratton, Michael. 2006. «Poor people and democratic citizenship in Africa», Afrobarometer Working Paper 56. <http://www.afrobarometer.org/papers/AfropaperNo56.pdf>
- Bratton Michael y Robert Mattes. 2000. «Support for democracy in Africa. Intrinsic or instrumental?», Afrobarometer Working Paper 1. <http://www.afrobarometer.org/abs-eries.html>
- Bratton Michael y Nicolas Van de Walle. 1997. *Democratic experiments in Africa: regime transitions in comparative perspective*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Bratton, Michael y Wonbin Cho. 2006. *Where is Africa going? Views from below*. Working Paper no. 60, Afrobarometer. www.afrobarometer.org/papers/AfropaperNo60.pdf
- Bräutigam, Deborah. 1999. «The Mauritius miracle: democracy institutions and economic policy», en Robert Joseph (ed.), *State, Conflict and Democracy in Africa*: Boulder: Lynne Rienner.
- Carbone, Giovanni. 2004. «La riduzione delle guerre civili nell'Africa subsahariana: nuovo trend o breve parentesi?», presentado al encuentro anual de la Sociedad italiana de ciencia política (Sisp): Padua 15-17 de septiembre 2004.

- Carbone, Giovanni 2005. *L'Africa. Gli stati, la politica, i conflitti*, Bologna: Il Mulino.
- Carothers, Thomas. 1997. «Democracy without illusions», *Foreign Affairs* 76: 85-99.
- Carroll Barbara W., y Terrance Carroll. 1997. «State and ethnicity in Botswana and Mauritius: a democratic route to development?», *Journal of Development Studies* 33: 464-86.
- Clapham, Christopher. 1996. *Africa and the international system: the politics of state survival*. Cambridge: Cambridge University Press
- Clapham, Christopher. 1997. «Opposition in tropical Africa», *Government and Opposition* 32: 541-557.
- Clarke, Peter B. (ed.). 1993. *The religions of the world: understanding the living faiths*, Londres: Marshall Editions Limited.
- Chabal, Patrick. 1998. «A few considerations on democracy in Africa», *International Affairs* 74: 289-303.
- Chabal Patrick y Jean Pascal Daloz. 1999. *Africa works. Disorder as a political instrument*. Oxford: James Currey.
- Chazan Naomi, Peter Lewis, Robert Mortimer, Donald Rothchild y Sharon J. Stedman. 1999. *Politics and society in contemporary Africa*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner.
- Cheibub, José Antonio, Adam Przeworski y Sebastian Saiegh. 2004. «Government Coalitions and Legislative Success under Presidentialism and Parliamentarism», *British Journal of Political Science* 34: 565-587.
- Collier, Paul. 2000. «Doing well out of war: An economic perspective», en Mats Berdal y David Malone (eds.), *Greed and grievance. Economic agendas in civil wars*. Boulder-Londres: Linne Ryenner.
- Crim, Keith (ed.), 1989. *The perennial dictionary of world religions*. San Francisco: Harper Collins.
- Decalo, Samuel. 1992. «The process, prospects and constraints of democratization in Africa», *African Affairs*, 91: 7-35,
- De Waal, Alex. 2003. «How will HIV/AIDS transform African governance?», *African Affairs*, 102: 1-24.
- Diamond, Larry. 1996. «Is the third wave over?», *Journal of Democracy* 7: 20-37.
- Diamond, Larry. 1997. *Prospects for democratic development in Africa*. Stanford: Hoover Institution.
- Diamond, Larry. 2001. «Developing democracy in Africa. African and international imperatives». www.comparativedemocratizationproject/StanfordUniversityDemocracyWebsite
- Diamond, Larry. 2002. «Thinking about hybrid regimes», *Journal of Democracy* 13: 21-35.
- Diamond, Larry. 2003. «Can the whole world become democratic? Democracy, development and international politics» Paper 03-05, The Hoover Institution Center for the Study of Democracy, University of California, Irvine: <http://repositories.cdlib.org/csd/03-05>
- Diamond, Larry. 2007. *The spirit of democracy*. Nueva York: Times Books.
- Docking, Timothy W. 1997. «Mali: the Roots of Democracy's Success», *L'Afrique politique: revendications populaires et recompositions politiques*, Burdeos: éditions Karthala/centre d'études d'Afrique noire

- Elbadawi, Ibrahim y Nicholas Sambanis. 2000. «Why are there so many civil wars in Africa?», Economics of civil war, crime and violence working paper series, Washington: the World Bank.
- Europa Publications. 2004. *The Europa world year book*. Londres: Europa Publications.
- Fearon James D., y David Laitin. 1996. «Explaining interethnic cooperation», *American Political Science Review* 90: 715-735.
- Fearon James D. y David Laitin. 2003. «Ethnicity, insurgency and civil war», *American Political Science Review* 97: 75-90.
- Fomunyoh, Christopher. 2001. «Democratization in fits and starts», *Journal of Democracy* 12: 37-50.
- Foweraker, Joe y Roman Krznaric. 2000. «Measuring Liberal Democratic Performance», *Political Studies* 48: 759-87.
- Freedom House (2006 y otros), *Freedom in the World. Table of social and economic indicators*: <http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=211&year=2005>
- Galaich, Glen. 1997. «Conditional Aid: Do We Get the “Wave” for our Buck in subsaharan Africa?» University of Colorado: <http://sobek.colorado.edu/~galaich/wip/paper.html>
- Gibson, James L. 2005. «The truth about truth and reconciliation in South Africa», *International Political Science Review* 26: 341-361.
- Gifford, Paul. (ed.) 1995. *The Christian Churches and the Democratization of Africa*, Leiden: E. J. Brill.
- Goldsmith, Arthur A. 2001a. «Donors, dictators and democrats in Africa», *Journal of Modern African Studies* 39: 411-436.
- Goldsmith, Arthur A. 2001b. «Foreign aid and statehood in Africa», *International Organization* 55: 123-48.
- Haynes, Jeff. 2001. *Democracy in the developing world: Africa, Asia, Latin America and the Middle East*, Cambridge: Polity Press.
- Haynes, Jeff. 2004. «Religion and democratization in Africa», *Democratization* 11: 66-89.
- Hearne, Julie. 1999. «Foreign aid, democratization and civil society in Africa: a study of South Africa, Ghana and Uganda», Brighton: Institute for Development Studies, Discussion Paper 368.
- Herbst, Jeffrey. 2001. «Political liberalization in Africa after ten years», *Comparative Politics* 33: 357-375.
- Huntington, Samuel P. 1995. *La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo*. Bolonia: Il Mulino.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The clash of civilizations and the remaking of world order*. Nueva York: Simon & Schuster.
- Hyden, Goran. 1992. «Governance and the study of politics», en Goran Hyden y Michael Bratton (eds.), *Governance and politics in Africa*. Boulder: Lynne Rienner.
- Iniesta, Ferrán. 1992. *El planeta negro*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Jeffries, Richard. 1998. «The Ghanaian Elections of 1996: Towards the Consolidation of Democracy?», *African Affairs* 97: 189-208.

- Jenkins, Philip. 2002. *The next Christendom*, Oxford: Oxford University Press.
- Joseph, Richard. 1984. «Class, state and prebendal politics in Nigeria», *Journal of Commonwealth and Comparative Politics* 21: 21-38.
- Joseph, Richard. 1998. «Africa, 1990-97: from abertura to closure», *Journal of Democracy* 9: 3-17.
- Joseph, Richard (ed.). 1999. *State, conflict and democracy in Africa*, Boulder, Lynne Rienner.
- Joseph, Richard. 2003. «Africa: states in crisis», *Journal of Democracy* 14: 159-70.
- Kiloh, Margaret. 1997. «South Africa: democracy delayed», en David Potter, David Goldblatt, Margaret Kiloh y Paul Lewis (eds.), *Democratization*, Cambridge: Polity Press.
- Le Vine, Victor. 1997. «The fall and rise of constitutionalism in West Africa», *The Journal of Modern African Studies* 35: 181-206.
- Luckham, Robin. 1994. «The military, militarization and democratization in Africa: a survey of literature and ideas», *African Studies Review* 37: 13-75.
- McGowan, Patrick J. 2003. «African military coups d'état, 1956-2001: frequency, trends and distribution», *Journal of Modern African Studies* 41: 339-70.
- McHenry, Dean E. Jr. 2000. «Quantitative measures of democracy in Africa: an assessment», *Democratization* 7: 168-185.
- Makumbe, M. John. 1998. «Is there a civil society in Africa?», *International Affairs* 74: 305-317.
- Monga, Celestin. 1997. «Eight problems with African politics», *Journal of Democracy* 8: 156-170.
- Musah, Abdel-Fatau. 2002. «Privatization of security, arms proliferation and the process of state collapse in Africa», *Development and Change* 33: 911-33.
- Owusu, Maxwell. 1997. «Domesticating democracy: culture, civil society, and constitutionalism in Africa», *Comparative Studies in Society and History* 39: 120-152.
- Przeworski, Adam, Fernando Limongi, José Antonio Cheibub y Michael Alvarez. 1996. «What makes democracy endure?», *Journal of Democracy* 1: 39-55.
- Przeworski, Adam, Michael Alvarez, José Antonio Cheibub y Fernando Limongi. 2000. *Democracy and development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Randall, Vicky y Lars Svåsand. 2002. «Party institutionalization and the new democracies», *Party Politics* 8: 5-29.
- Roca, Albert (ed.). 2005. *La revolución pendiente. El cambio político en África negra*. Lérida: Sud-Nord.
- Santamaría, Antonio y Enara Echart (eds.). 2006. *África en el horizonte*. Madrid: Los libros de la Catarata.
- Schatzberg, Michael G. 2001. *Political legitimacy in Middle Africa: father, family, food*. Bloomington: Indiana University Press.
- Smith Kay, Zeric. 1993. *Democracy and civic community in Mali*. Tesis doctoral, University of North Carolina at Chapel Hill.

- Smith Kay, Zeric. 2002. «Mali's decade of democracy», *Journal of Democracy* 13: 73-79.
- Thomson, Alex. 2002. *An Introduction to African Politics*. Londres: Routledge.
- Tordoff, William. 2002. *Government and politics in Africa*, Londres: McMillan.
- Udogu, E. Ike. 1997. *Democracy and democratization in Africa: toward the 21st Century*. Boulder: Lynne Rienner.
- UNDP, United Nations Development Program. 2004. *Human Development Report, 2004*. <http://hdr.undp.org/statistics/data/>
- UNDP, United Nations Development Program. 2007. *Human Development Report, 2007*. <http://hdr.undp.org/hdr2007/statistics/data/>
- Young, Crawford. 1996. «Africa: an interim balance», *Journal of Democracy* 7: 53-68.
- Van de Walle, Nicolas. 1999. «Economic reform in democratizing Africa», *Comparative Politics* 32: 21-41.
- Van de Walle, Nicolas. 2001. *African economies and the politics of permanent crisis, 1979-1989*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Van de Walle, Nicolas. 2002. «Africa's range of regimes», *Journal of Democracy* 13: 66-80.
- Van de Walle, Nicolas. 2003. «Presidentialism and clientelism in Africa's emerging party systems», *The Journal of Modern African Studies* 41: 297-321.
- Van de Walle, Nicolas y Kimberly Smiddy Butler. 1999. «Political parties and party systems in Africa's illiberal democracies», *Cambridge Review of International Studies* 13: 14-28.
- Widner, Jennifer A. 1997. «Party systems and civil societies in Africa», en Marina Ottaway (ed.), *Democratization in Africa: The Second Phase*. Boulder: Lynne Rienner.
- Wieland, Carolina. 1998. «Economic policy reform and political transitions in subsaharan Africa», *Democratization* 5: 127-155.
- Wiseman, John A. (ed.). 1995. *Democracy and political change in Subsaharan Africa*. Nueva York, Routledge.
- Wiseman, John A. 1997. «The rise and fall and rise (and fall?) of democracy in subsaharan Africa», en David Potter, David Goldblatt, Margaret Kiloh y Paul Lewis (eds.), *Democratization*, Cambridge: Polity Press.
- World Bank. 1992. *World development report*, Washington D.C.: The World Bank.
- World Bank. 2004. *World development report*, Washington D.C.: The World Bank.
- Zakaria, Fareed. 1997. «The Rise of Illiberal Democracy», *Foreign Affairs* 76: 22-42.
- Zartman, I. William (ed.). 1995. *Collapsed States: the Disintegration and Restoration of Legitimate Authority*. Boulder: Lynne Rienner.

Presentado para evaluación: 1 febrero de 2006

Aceptado para publicación: 18 de octubre de 2007

DAVIDE GRASSI

davide.grassi@unito.it

Es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Turín. Se ocupa de procesos de democratización en diferentes países y áreas del mundo. En 2008 ha publicado el volumen: *Le nuove democrazie. I processi di democratizzazione dopo la caduta del muro di Berlino*, editorial Il Mulino, Bolonia. También ha publicado numerosos artículos en revistas académicas, italianas e internacionales, como la *Rivista italiana di scienza politica*, *Swiss political science review* y *Revue internationale de politique comparée*, entre otras. En la actualidad colabora con un proyecto de investigación acerca de las consecuencias de las democratizaciones y del impacto de las nuevas democracias sobre políticas sociales.